

**Sr. Presidente (Pierri).** — Queda autorizada la inserción en la forma peticionada por el señor diputado.<sup>1</sup>

15

# JUICIO ABREVIADO

(Orden del Día N° 561)

**Sr. Presidente (Pierri).** — Corresponde considerar el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre modificación al Código Procesal Penal.

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Legislación Penal ha considerado los proyectos de ley de los señores diputados Cafferata Nates y Menem, sobre incorporación al título II del libro III del Código Procesal Penal de un capítulo que regula el juicio abreviado y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º — Incorporase al título II del libro III del Código Procesal Penal el siguiente capítulo.

### CAPÍTULO IV

#### Juicio abreviado

Artículo 431 bis:

1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346, estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años, o de una no privativa de libertad aun procedente en forma conjunta con aquella, podrá solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según este capítulo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena.
2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la participación de aquél, descritas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída. A los fines de este artículo, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo que se dejará simple constancia.
3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, al tribunal de juicio el que, tomará conocimiento de visu del imputado, y lo escuchará si éste quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesi-

dad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida, llamará a autos para sentencia, que deberá dictarse en un plazo máximo de 10 días. Si hubiera querrelante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, le recabará su opinión, la que no será vinculante.

4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo de juicio abreviado, se procederá según las reglas del procedimiento común con arreglo a los artículos 354 o 405, según corresponda, remitiéndose la causa al que le siga en turno.

En tal caso, la conformidad prestada por el imputado y su defensor no será tomada como un indicio en su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate.

5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en su caso en la admisión a que se refiere el punto 2, y no podrá imponer una pena superior o más grave que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el artículo 399.

6. Contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones comunes.

7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento por juicio abreviado, salvo que exista un acuerdo entre las partes en tal sentido, aunque se podrá deducir en sede civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de casación en la medida que la sentencia pueda influir sobre el resultado de una reclamación civil posterior.

8. No regirá lo dispuesto en este artículo en los supuestos de conexión de causas, si el imputado no admitiere el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación de oficio (artículo 43).

Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad.

Art. 2º — Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todas las causas en trámite.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 20 de agosto de 1936.

Carlos O. Menem. — Sergio E. Accredo. — José L. Zavalía. — Carlos R. Alvarez. — Norma Goley. — Adriana R. Bortolozzi de Bagnoli. — José L. Cafferata Nates. — Melchor R. Cruchaga. — Francisco U. Frigosa. — Miguel A. Fichetto.

### INFORME

*Honorable Cámara:*

La idea de lograr sentencias en un lapso razonable, que sin desmedro de la justicia ahorre energía y recur-

sos jurisdiccionales, ha producido corrientes de opinión en el sentido de evitar el juicio oral y público cuando el no sea imprescindible para arribar a una sentencia que resuelva el caso con respeto de los principios de legalidad y verdad.

Con este propósito se han dictaminado favorablemente los presentes proyectos de juicio abreviado, que procede cuando existe conformidad del imputado respecto de los términos de la acusación fiscal.

La procedencia de la abreviación tiene control jurisdiccional, ya que debe ser resuelta por el tribunal de juicio. Admitido el juicio abreviado, el tribunal deberá fallar el caso sin audiencia de juicio y con las pruebas rendidas durante la instrucción.

Cabe aclarar que el juicio abreviado que se ha dictaminado favorablemente, no se corresponde con el *plea-bargaining americano*, ya que sólo procede ante convenios que respeten la "verdad procesal", relacionada con el hecho efectivamente probado, y el principio de legalidad, en relación con la calificación jurídica del hecho probado y la correspondiente pena según dicha calificación.

Estamos persuadidos que el juicio abreviado podrá ser un instrumento útil para acelerar los fallos judiciales sin desmedro de los acendrados principios de nuestro sistema judicial.

Carlos O. Menem.

### ANTECEDENTES

1

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º — Modifícase el artículo 346 del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 346: Cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querrelante y al agente fiscal por el término de seis (6) días, prorrogable por otro período igual en casos graves o complejos.

Este decreto deberá ser notificado al imputado y a su defensor, a los fines del artículo 431 bis. 2.

Art. 2º — Incorporase el siguiente texto como artículo 347 bis del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984:

Artículo 347: El agente fiscal al formular el requerimiento de elevación a juicio podrá solicitar la aplicación del procedimiento de juicio abreviado, en cuyo caso procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 431 bis. 1.

Art. 3º — Modifícase el artículo 349 del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 349: Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los

dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término de seis (6) días:

1. Deducir excepciones no interpuestas con anterioridad.
2. Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreesamiento.
3. En el supuesto del artículo 347 bis, prestar la conformidad a que se refiere el artículo 431 bis. 2.

Si no se dedujeren excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de tres (3) días de vencido el plazo anterior, salvo el caso del artículo 431 bis. 6.

Art. 4º — Incorporase como capítulo IV del título II — Juicios especiales — del libro III del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el siguiente artículo:

### CAPÍTULO IV

#### Juicio abreviado

Artículo 431 bis:

1. Si el agente fiscal estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad no mayor de seis (6) años, o de una no privativa de libertad, aun procedente en forma conjunta, podrá solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se tramite la causa conforme al procedimiento de juicio abreviado previsto en este capítulo. En tal caso deberá formular expreso pedido de pena.
2. Para que tal solicitud sea admisible, el agente fiscal deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor respecto de la adopción de la vía procedimental abreviada. Estos también podrán requerirla en la oportunidad del artículo 346 in fine y hasta antes de la formulación del requerimiento de elevación a juicio.
3. Salvo el caso del artículo 431 bis. 6, el juez elevará el pedido del artículo 431 bis. 1 y la conformidad del artículo 431 bis. 2, sin otra diligencia, al tribunal de juicio el que, si no rechaza la abreviación del trámite por considerarla inconveniente, correrá vista al imputado y su defensor. Si hubiese querrelante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, le requerirá su opinión, la que no será vinculante.
4. Si el tribunal rechazara el acuerdo de juicio abreviado, se procederá de acuerdo al trámite ordinario, con arreglo al artículo 354. En tal caso, la conformidad prestada por el imputado no podrá ser tomada como un indicio de culpabilidad en su contra, ni el pe-

<sup>1</sup> Véase el texto de la inserción en la página 4211.

dido de pena formulado por el agente fiscal vinculará al ministerio fiscal que actúe en el debate.

3. Si al evacuar la vista del artículo 431 bis, 3, el imputado asistido por su defensor admitieren el hecho y su participación según lo descrito en el requerimiento fiscal, el tribunal llamará a autos para sentencia, caso contrario se seguirá el trámite ordinario.

La sentencia deberá dictarse en el término de cinco días, se fundará en las pruebas recibidas durante la instrucción y en la admisión a que se refiere el párrafo anterior, y no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el agente fiscal. Regirán en lo pertinente las reglas de la sentencia.

6. Si la pena privativa de libertad requerida por el agente fiscal no fuera superior a tres años, el juicio abreviado tramitará ante el juez de instrucción, quien procederá con arreglo a las disposiciones del artículo 431 bis, puntos 3, 4 y 5.

Si éste rechazara la abreviación del trámite el agente fiscal, el imputado o el defensor podrán solicitar en el término de tres (3) días, opinión del tribunal de juicio respecto de la aplicación del trámite abreviado.

Si éste se expidiera favorablemente, el juez de instrucción deberá proceder de conformidad al artículo 431 bis, 3 *in fine* y, en su caso, con el artículo 431 bis 5. En caso contrario, se adoptará el trámite ordinario.

7. Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad.
8. Contra la sentencia sólo será admisible el recurso de casación interpuesto por el ministerio fiscal, o por el imputado y su defensor. En el supuesto previsto en los artículos 431 bis, puntos 5 y 6, la sentencia que se dicta sólo será ininterdicible para el imputado y su defensor, por el motivo del artículo 456, inciso 2º.
9. El querrelante sólo podrá recurrir de la sentencia absolutoria.
10. La acción civil no será resuelta en el procedimiento por juicio abreviado, aunque se pueda deducir en sede civil. Sin embargo, quienes fueren admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de casación en la medida que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior.

Art. 5º.—Modifícase el artículo 25 del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 25: Los tribunales en lo criminal juzgan en única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal. Asimismo emitirán su opinión en el supuesto previsto por el artículo 431 bis, 6.

Art. 6º.—Modifícase el artículo 26 del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 26: El juez de instrucción investiga los delitos de acción pública de competencia criminal, excepto en los supuestos en los que el ministerio fiscal ejerce la facultad que le otorga el artículo 196. Asimismo juzgará los delitos por vía de juicio abreviado en el supuesto del artículo 431 bis 6.

Art. 7º.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José I. Cafferata Nores.

2

#### PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.—Incorpórase al título II del libro III del Código Procesal Penal (ley 23.984), el siguiente capítulo:

#### CAPÍTULO IV

##### Juicio abreviado

Artículo 431 bis: Cuando al formular el requerimiento de elevación a juicio, el agente fiscal estimare suficiente la imposición de una pena privativa de la libertad inferior a seis años, o de una pena no privativa de la libertad, aun procedente en forma conjunta, podrá solicitar que la causa se tramite conforme al procedimiento de juicio abreviado previsto en este capítulo, formulando expreso pedido de pena.

En tal caso, la solicitud deberá ser acompañada con la aceptación del requerimiento fiscal formulada por el imputado, asistido por su defensor. Esta aceptación no podrá luego modificarse.

El juez remitirá la causa por simple decreto al tribunal que corresponda. Si hubiere parte querrelante, previamente el juez le correrá vista por tres (3) días sobre la procedencia del trámite de juicio abreviado.

Cuando hubiere varios imputados en la causa, el trámite de juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos lo hubieren aceptado.

Artículo 431 ter: Si el tribunal aceptare el acuerdo, llamará a autos para sentencia y convocará a las partes a una audiencia para su lectura, que se fijará dentro del plazo máximo de diez (10) días.

La sentencia se fundará en las pruebas recibidas durante la instrucción y en la aceptación del requerimiento fiscal por parte del imputado, y no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el agente fiscal.

La acción civil no será resuelta en la sentencia.

Artículo 431 quáter: Si el tribunal rechazare el acuerdo, el trámite continuará conforme al artículo 354.

En ese caso la causa será remitida al tribunal que siga en orden de turno, y la aceptación del requerimiento fiscal por parte del imputado no po-

drá ser tomada como indicio de culpabilidad en su contra, ni el pedido de pena formulada por el agente fiscal vinculará al fiscal que actúe en el debate.

El tribunal podrá rechazar el acuerdo de juicio abreviado cuando considere que:

- a) No hay prueba suficiente acerca del hecho o de la responsabilidad del imputado;
- b) La pena solicitada por el agente fiscal no resulta a primera vista adecuada al caso.

Art. 2º.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carlos O. Menem.

Sr. Presidente (Pierri).—Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

En consideración en general.

Sr. Aramburu.—Señor presidente: hemos recibido una sugerencia de enmienda por parte de la Procuración General de la Nación, que en su momento fue aceptada por la Comisión de Legislación Penal.

En el artículo 1º, en los puntos 1 y 2 del artículo 431 bis que se incorpora, se sugieren dos párrafos, a los que pasaré a dar lectura.

En primer término, en el punto 1 se agrega lo siguiente: "En las causas de competencia criminal (artículo 32), el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 431 bis, podrá también celebrarse durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate (artículo 359)".

En el punto 2 del mismo artículo se propone lo siguiente: "A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la aceptación del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo que se dejará simple constancia".

Sr. Presidente (Pierri).—Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cafferata Nores.—Señor presidente: el proyecto en consideración sobre el denominado "juicio penal abreviado" tiene como objetivo lograr una más racional distribución de los recursos que el Estado afecta al proceso penal. Para ello se autoriza un procedimiento sin debate oral y público para los casos en que exista acuerdo entre el acusado y el fiscal acerca de la abreviación del procedimiento sobre la base de la aceptación de la acusación por parte del acusado y su defensor, y del acuerdo sobre la pena eventualmente a imponer entre aquéllos y el fiscal.

Este proyecto reconoce como antecedentes normas de legislaciones extranjeras, por ejemplo de Estados Unidos, donde contrariamente a lo que se muestra en los medios de comunicación, casi el 90 por ciento de los juicios criminales terminan por este procedimiento, sin el juicio público por jurados.

No obstante el antecedente, tenemos que marcar la diferencia de orientación entre el derecho anglosajón y el argentino, porque allá —y no aquí— estos acuerdos permiten que entre fiscal y acusado se realice una verdadera transacción, autorizándose a que se acuse por menos delitos que por los que habría que acusar, y que se acepten calificaciones legales más benignas que las que debieran aplicarse, con el propósito de lograr un consentimiento del acusado con la pena que pedirá el fiscal.

En el sistema jurídico argentino esto no se puede llevar a cabo porque rigen los principios de legalidad y de verdad. Ambos principios no impiden investigar ni castigar hechos que se han cometido; impiden imponer pena menor a la que esos hechos merecen, e impiden el cambio a una calificación legal más benigna.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. Cafferata Nores.—Pero el margen del juicio abreviado que hoy tratamos se maneja sobre la escala penal. La mayoría de nuestros delitos tiene previsto un mínimo y un máximo de pena posible, y es entre estos extremos donde puede tener lugar el acuerdo.

Esta idea parte de las siguientes bases. En primer lugar, el imputado, asistido por su defensor, debe consentir la acusación. En segundo término, el Ministerio Fiscal debe acordar con el imputado y su defensor la imposición de una pena dentro del mínimo y del máximo de la escala prevista para el delito. En tercer lugar, el tribunal que intervenga tiene que aceptar este acuerdo, pudiendo no hacerlo cuando considere que es necesaria la realización del juicio. Cuarto, se debe tomar conocimiento *de visu* del acusado. Por último, se dicta sentencia. Pero deseo aclarar que la base de la sentencia de condena que pueda dictarse a raíz de este acuerdo no es el reconocimiento de la acusación realizada por el acusado solamente, sino en todo caso la prueba que se ha recibido durante la instrucción; prueba que se considera suficiente para acreditar la culpabilidad a criterio del defensor, del acusado, del

Ministerio Fiscal y del tribunal. La confesión no es determinante de la condena; la confesión es corroborante de la prueba recibida en la instrucción que fundará la condena. Es que se considera en estos casos que repetir en el juicio oral la prueba que se ha recibido en la instrucción —que sirve para aclarar los extremos de la imputación y darlos por acreditados— sería un desgaste jurisdiccional inútil que puede evitarse mediante este acuerdo.

También debe enfatizarse —ésta ha sido una observación del señor diputado Corini— que es fundamental para el caso de imputados que no tengan defensor particular y que se tengan que valer de una defensa oficial, que esta última sea eficaz, para que esto no se transforme en una desigualdad para los pobres. El defensor oficial debe ser en estos casos tan eficaz como puede serlo el defensor particular, a la hora de asesorar al acusado sobre lo que más le conviene en relación con el juicio abreviado.

Este sistema no procura de ninguna manera acentuar rasgos de impunidad del sistema penal. Simplemente procura facilitar condenas judiciales en un sistema penal en el cual son muchos más los presos sin condena que aquellos que están cumpliendo una impuesta por la Justicia; permite agilizar los procesos penales, abarata considerablemente el costo del juicio penal y alivia la tarea de los tribunales orales, que en la actualidad se encuentran saturados por la gran cantidad de causas que tienen que resolver. Asimismo, aquí se consulta el interés del acusado, quien mediante la colaboración prestada a través del acuerdo puede lograr certeza en la definición de su situación legal, participar de algún modo en ella y obtener una pena, dentro de los límites de la escala, más acorde con sus expectativas, lo cual puede resultarle atractivo. Esta iniciativa no tiene precedentes sólo en los Estados Unidos. La provincia de Córdoba, que ha sido pionera, incorporó en 1935 el juicio abreviado. El resultado estadístico de un año de vigencia de este procedimiento especial revela que casi el 48 por ciento de las sentencias condenatorias que dictaron las cámaras en lo Criminal de la provincia de Córdoba surgieron del procedimiento de juicio abreviado, sin que haya habido tachas de ninguna naturaleza por parte de defensores, funcionarios del ministerio fiscal o integrantes de los tribunales que han intervenido.

El juicio abreviado no puede darse para cualquier tipo de delito o gravedad de pena. La comisión consideró que había que reducir el ámbito posible del juicio abreviado a la imposición de penas que fueran inferiores a los seis años de prisión.

De esta forma consideramos haber expuesto los fundamentos que ha tenido la Comisión de Legislación Penal para dar aprobación unánime a esta iniciativa, pidiendo autorización para insertar en el Diario de Sesiones un texto escrito que contiene una ampliación de mi exposición.

**Sr. Presidente (López Arias).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: naturalmente la introducción de la oralidad al sistema judicial en materia penal ha resuelto sustancialmente la lentitud de los procesos. Sin embargo, hoy observamos que los tribunales están abarrotados por causas que no pueden resolver.

También es cierto que en las cárceles hay más presos sin condena que los que cuentan con ella. Por eso hoy nadie duda de la necesidad de agilizar los procedimientos en las causas penales, sobre todo porque está en juego la libertad de los individuos.

En el debate de la ley 24380, sobre acortamiento de los plazos en materia de prisión preventiva, se pusieron en el tapete los largos procesos que —en algunos casos por manobras de los abogados y en otros por inacción judicial— tienen por único perjudicado al propio imputado en una condición de cumplimiento de las penas, que no es la correcta.

Aquí no hallamos ante la propuesta de una abreviación de lo que sería el juicio propiamente dicho. Son numerosos los casos en que, aun existiendo confesión del imputado y un caudal de pruebas suficientemente acreditado, la causa debe igualmente llevarse a debate.

Estamos planteando los casos en que existe conformidad entre el fiscal y el defensor respecto de la adecuación de la pena por la figura penal vulnerada.

El consenso, la conformidad del autor y el resto de las pruebas acumuladas en la causa tornan innecesaria la realización del debate. De allí lo importante de contar con un método ágil y eficaz para la sustanciación breve del proceso.

Este procedimiento se da cotidianamente en los Estados Unidos de manera diferente —según la referencia del doctor Cafferata Nores—, ya que en nuestro país se pretende que se respete la verdad procesal, que está relacionada con el hecho efectivamente probado y con el principio de legalidad con referencia a la calificación de ese hecho y la correspondiente pena.

La procedencia de la abreviación tiene control jurisdiccional ya que debe ser resuelta por el tribunal del juicio. Admitido el juicio abreviado, el tribunal deberá fallar el caso sin audiencia

de juicio y con las pruebas presentadas durante la instrucción.

Tal como ya expresara el señor presidente de la comisión, el señor diputado Aramburu, por sugerencia de la Procuración General de la Nación se ha aceptado incorporar en particular la aplicación de este procedimiento durante los actos preliminares del juicio y hasta el dictado del decreto de fijación de la audiencia del debate. De esta manera se habilita también la posibilidad de acuerdo con el fiscal del tribunal oral para que proceda el juicio abreviado.

Por estas consideraciones y en atención al tiempo transcurrido, solicito que nos acompañen en esta sanción.

**Sr. Presidente (López Arias).** — Se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (López Arias).** — En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: si bien este proyecto es encomiable porque apunta a dar mayor celeridad al proceso, creo que, tal como están redactados los artículos 1º y 2º, constituye una regresión al "escrituralismo".

Específicamente en el artículo 2º se da un problema vinculado con el ejercicio de la defensa en juicio, que podría tornarlo inconstitucional. Cuando el fiscal estima que la pena no superará los seis años, debe reunirse con el defensor y el imputado necesariamente para escucharlos, y no como se dice en el último párrafo del punto 2 del artículo 431 bis a que se refiere el artículo 1º en tratamiento, en el sentido de que "...el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo que se dejará simple constancia". Si esto es facultativo no se respetará el ejercicio del derecho de defensa.

Entonces sugiero que en lugar de decir "...el fiscal podrá recibir en audiencia...", diga "...el fiscal recibirá en audiencia..."

**Sr. Presidente (López Arias).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: la comisión sólo acepta las modificaciones propuestas por la Procuración General de la Nación.

**Sr. Presidente (López Arias).** — Se va a votar el artículo 1º con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (López Arias).** — En consideración el artículo 2º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Garay.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (López Arias).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: mi intención era sugerir algunas modificaciones durante el tratamiento en particular de la iniciativa, y por eso cuando el presidente puso a votación el artículo 2º levanté la mano para poder hacer uso de la palabra.

**Sr. Presidente (López Arias).** — Aunque el artículo 2º ya se votó, lo escuchamos.

**Sr. Garay.** — Estoy señalando un conjunto de particularidades del artículo 1º que necesariamente pueden vincularse con un tema de procedimiento.

El procedimiento es un conjunto de pasos y cada uno de ellos tiene alguna pauta que deseo mencionar porque creo que es de suma importancia, aun cuando el señor diputado por La Rioja no ha tenido la deferencia de decir por qué motivo dijo lisa y llanamente que no. Creo que no ha consultado con la comisión, porque de lo contrario hubiera tenido la gentileza de señalar cuál es el motivo por el que manifiesta imperativamente que no se acepta.

Ello contraría el sentido del Parlamento y del ejercicio del derecho parlamentario, que posibilita y procura la discusión racional. Una mera negativa no tiene sentido alguno y parecería que se pretende mantener la redacción del proyecto tal como fue confeccionada en la comisión.

Solicito que me escuchen pues deseo señalar algunas pautas...

**Sr. Presidente (López Arias).** — La Presidencia desea recordar en primer término al señor diputado por Corrientes que en oportunidad de otorgársele el uso de la palabra estaba ausente; y segundo, que el artículo 2º ya fue votado. En consecuencia, no se lo puede considerar nuevamente para conocer los motivos por los que la comisión rechazó la modificación.

—El artículo 3º es de forma.

**Sr. Presidente (López Arias).** — Queda sancionado el proyecto de ley.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Fé- gina 4123.)

Se comunicará al Honorable Senado.  
Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado Cafferata Norez.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Queda autorizada la inserción pedida.<sup>1</sup>

*cisco U. Fragoso. — Ana R. Kessler. — Sara C. Liponezky de Amaret. — Marcelo E. López Arias. — María del Carmen Mossello de Benzo. — Rafael M. Pascual. — Juan C. Piriz. — Tomás R. Pruyas. — Humberto J. Roggero. — Rubén D. Rojo. — Juan Schiaretli. — Juan C. Suárez. — Juan C. Veramendi. — José A. Vitar.*

# C. INSERCIONES

## INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CAFFERATA NORES

Ampliación de la exposición del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre modificación del Código Penal en materia de juicio abreviado

### I. Justificación

La idea de lograr sentencias en un lapso razonable, con fuerte ahorro de energía y recursos jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia, tradicionalmente aceptada para delitos leves, se ha extendido últimamente también para el tratamiento de ilícitos de mayor entidad. Respecto de éstos, ahora se admiten alternativas para evitar el juicio oral y público, cuando él no sea imprescindible para arribar a una sentencia que resuelva el caso, con respecto de los principios de legalidad y verdad. Condición *sine qua non* (aunque no la única) para ello será que la prueba reunida en la investigación preparatoria sea idónea a tal fin, sin que sea necesario reproducirla en un debate, a criterio de los sujetos esenciales del proceso.

### II. Procedencia

Bajo esta premisa y con aquel propósito aparece la propuesta del juicio abreviado, que procede en caso de flagrancia o confesión llana y circunstanciada del imputado (que podría sustituirse por una conformidad con la acusación); requiere el acuerdo del tribunal, el Ministerio Público Fiscal y el imputado y su defensor, sobre su procedencia; permite omitir la recepción oral y pública de la prueba y fundamentar la sentencia en las pruebas recibidas en la investigación preparatoria (que se consideran idóneas para resolver el caso), no pudiendo imponerse —en tal supuesto— al imputado una sanción más grave que la pedida por el Ministerio Público Fiscal.

Pero es cierto que aquel acuerdo es formal, porque sólo exterioriza uno previo y de carácter material: el que el Ministerio Público Fiscal y el defensor hacen sobre la pena a imponer, que será más leve como contrapartida del consentimiento para el trámite abreviado, o de la confesión, y que el tribunal, si lo acepta, no podrá aumentar.

### III. El principio de legalidad

Tal como está estructurado actualmente nuestro sistema penal —que sigue respondiendo al principio de legalidad y al de verdad real, salvo contadas excepciones (verbigracia, suspensión del juicio a prueba)— no hay un marco jurídico que permita incorporar en el acuerdo criterios de oportunidad o concesiones hacia la verdad consensuada. Este debe circunscribirse a la cantidad o calidad de la pena aplicable al caso concreto, de acuerdo a la calificación jurídica que corresponde al hecho acusado, que además de flagrante, confesado o reconocido por el imputado, debe consen-

trarse acreditado concordantemente por las pruebas de la investigación preparatoria.

No se trata, entonces, de que el acuerdo pueda libremente evitar la pena para algunos delitos, reprimiéndose sólo otros, o que la pena a imponer sea inferior al mínimo de la escala prevista para el delito acusado, o que se acepte una calificación legal que no corresponda, o que se tenga como probado un hecho distinto del que ocurrió, o como existente uno que no está acreditado que exista, o que el acusado participó en él (aun cuando en la realidad algunas de estas cosas puedan ocurrir).

Se trata de acordar un punto entre el mínimo y el máximo de la escala penal conminada para el delito de que se trata (o la elección de una pena entre las previstas como alternativas) que a criterio del acusado le resulte favorable, como contrapartida de su consentimiento al procedimiento más rápido y económico (caso de flagrancia) o de su reconocimiento o aceptación de los hechos que se le atribuyen. La confesión ha sido valorada tradicionalmente como una circunstancia atenuante de la pena.<sup>1</sup>

Es posible encontrar en el juicio abreviado reminiscencias de la *plea bargain* americana, verdadera negociación de la acción penal, mediante la cual el fiscal puede concertar con el imputado condiciones más favorables para este último, siempre a cambio de su confesión, lo que se expresa finalmente en la imposición de una pena menor a la que correspondería<sup>2</sup>. Sin embargo, la diferencia esencial entre ambos, es que esta práctica de los Estados Unidos no respeta los principios de legalidad ni de verdad, pues el acuerdo permite no perseguir todos los delitos atribuidos, o la admisión como ciertas, de hechos de menor gravedad que los ocurridos realmente.

En otros términos, la *plea bargain* permite la disposición sobre la pretensión penal; y el juicio abreviado, no lo permite (ni podría hacerlo sin que lo autorice el derecho penal sustantivo).

### IV. La verdad

El proceso penal aspira a lograr una reconstrucción conceptual del hecho que constituye un objeto, lo más ajustado posible a la realidad, procurando una concordancia o adecuación entre lo ocurrido y lo que se conoce al respecto. Es la verdad correspondencia, o verdad real, es una aspiración que se reduce, por las dificultades fácticas y las limitaciones jurídicas reconocidas, a una verdad aproximativa o "verdad procesal".

El juicio abreviado no piensa en prescindir de ella, o en sustituirla por una verdad consensuada<sup>3</sup> (al menos de acuerdo a su regulación legal). Basta reparar en que la sentencia se fundará en las pruebas recogidas en la investigación fiscal preparatoria (que se orienta hacia el logro de la verdad) y no en la confesión que pudiera haber prestado el acusado, en el marco

del acuerdo, confesión que —es bueno recordarlo— deberá ser verosímil y concordante con aquellas probanzas, lo que ratificará (reforzándolo) su valor convictoral. Solo en estas condiciones puede imaginarse que el tribunal, el ministerio público fiscal y el defensor del imputado acuerden responsablemente, omitir la recepción en juicio oral y público de las pruebas tendientes a acreditar la culpabilidad del confesante. A la vez, en la hipótesis de flagrancia, la prueba está *in re ipsa*.

En tal sentido se ha dicho que el juicio abreviado corresponde para casos que no revistan complejidad de prueba y que su evidencia obvie la recepción de toda otra prueba por innecesaria, en los que el material probatorio legalmente coleccionado en la investigación penal preparatoria, puede dar base a la sentencia, "prescindiendo de una reiteración presumida como estéril, por los sujetos esenciales del proceso", porque no se trata de un acuerdo entre partes sin asidero probatorio, sino el caso de que todo fue "muy bien aclarado durante la instrucción".<sup>4</sup>

#### V. Control jurisdiccional

La procedencia del juicio abreviado requiere la conformidad del tribunal (si no la presta, debe adoptarse el trámite ordinario ante otro tribunal) que estará relacionada, en realidad, con su anuencia sobre los siguientes puntos: que el hecho y la participación flagrante aceptada o confesada por el imputado se encuentren suficiente y concordantemente acreditados por las pruebas reunidas en la investigación preparatoria; que la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público Fiscal sea la adecuada, y la pena requerida sea acorde con ese encuadramiento; y que su monto suficiente (a criterio del tribunal). Sin embargo, este último debería excluirse del control jurisdiccional, previendo que, si su negativa al trámite abreviado acordado por el Ministerio Público Fiscal y el defensor, se fundó en que la calificación legal aceptada en el acuerdo era discutible, o que era necesario el juicio común para procurar un mejor conocimiento de la verdad, y el resultado final de este corrobora ambos puntos del acuerdo, no se podrá imponer más pena que la convenida allí por el Ministerio Público Fiscal y el defensor.

Por cierto que si el acuerdo es rechazado, el reconocimiento de culpabilidad se tendrá por no producido, y la pena pactada no vinculará al fiscal del juicio común.

Desde otra óptica, no será causal de rechazo del acuerdo, la previsión de absolución por falta de pruebas o de ausencia responsabilidad penal, o de calificación legal más benigna o imposición de pena menor que la acordada porque tales resoluciones podrán igualmente adoptarse en el juicio abreviado: el único límite a la decisión del tribunal, es no superar la pena pedida por el Ministerio Público Fiscal, pudiendo imponer una menor o ninguna, según entienda que corresponde.

Como el acuerdo significa la renuncia del "juicio como acto"<sup>5</sup> "el tribunal deberá controlar que la confesión del acusado sea voluntaria (sin coacción ni engaño), y prestada con pleno conocimiento de las conse-

cuencias que le traerá, y con una eficiente tarea de la defensa técnica al respecto (especialmente si es prestada por el Estado)".

#### VI. Garantías constitucionales

Dadas estas condiciones, no se advierte que el juicio abreviado ponga en crisis el principio del debido proceso, pues las exigencias de éste se respetan. Hay acusación, defensa (que se ejercita a través de un reconocimiento de participación en el delito libremente formulada, y estimada conveniente a sus intereses por el imputado, debidamente asesorado por el defensor) prueba (la recibida en la investigación preparatoria estimada idónea por el Ministerio Público Fiscal, imputado, defensor y tribunal), sentencia (que se fundará en las pruebas de la investigación preparatoria —y en el corroborante reconocimiento de culpabilidad del acusado—, y definirá el caso) y recursos (que procederán por las causales comunes). Debe enfatizarse, sin embargo, en la necesidad de un servicio estatal de defensa que pueda cumplir eficientemente su función, para evitar que el juicio abreviado sea aceptado, sin suficiente asesoramiento, por los imputados que no pueden acceder, por incapacidad económica, al consejo de un abogado particular.

#### VII. La práctica

El legalmente novedoso juicio abreviado ha tenido una aplicación en la experiencia de tribunales, que parecería asombrosa, si no estuviera revelando que la negociación sobre la pena ya era algo incorporado a la rutina del juicio penal, expresada a través del acuerdo de incorporar al debate todas las pruebas de la investigación preparatoria por su lectura, eufemismo que implica lisa y llanamente fundar en ellas la sentencia.

La estadística de un año de funcionamiento en Córdoba, indica que todas las cámaras en lo criminal han aceptado su validez y lo han utilizado; y que del total de sentencias definitivas dictadas en ese lapso por estos tribunales, el 43 % lo fueron por medio del juicio abreviado (281 sobre 651).

#### VIII. Límites

Si bien la experiencia demuestra que, a pesar de la falta de límite objetivo para la procedencia del juicio abreviado (en teoría podría admitirse para cualquier especie y monto de pena) los tribunales lo han utilizado sólo para delitos leves o de mediana entidad, podría razonablemente pensarse en la necesidad de acotarlo expresamente a este tipo de delitos: las nuevas propuestas al respecto lo autorizan cuando sea previsible la imposición de una pena privativa de libertad que no exceda los seis años.

#### NOTAS

<sup>1</sup> "La versión confesoria certera —dice Montero, Jorge— debe valorarse en el futuro como una conducta atemperante en la mesuración de la pena." "El procedimiento abreviado en materia penal", en "Estudio so-

bre el nuevo Código Procesal Penal de Córdoba", página 248. La jurisprudencia argentina ha admitido la confesión como atenuante de la pena, valorándola como un indicio favorable de la personalidad del imputado al ser demostrativa de arrepentimiento (verbi gratia CCrim. Rosario, Sala II, 17-4-80, "H.M.F. y otro", en "Zeus", tomo 20-166; CNFed., Sala Crim. y Correcc. 20-10-70, "Rodríguez, Antonio y otro", en "La Ley" 142-522; CNCRim. y Correcc. Sala V, 31-5-68, "Alonso, Alberto", en "La Ley" 133-477). Ya el Proyecto Tejedor incluía explícitamente a la confesión como atenuante de la pena. (Ver Gurruchaga, Hugo: "La ética y la confesión en el procedimiento penal", "La Ley" 1993 D-1.150.)

<sup>2</sup> Bovino, Alfredo. "Simplificación del procedimiento y juicio abreviado", en "Primeras Jornadas Provinciales de Derecho Procesal" (Colegio de Abogados de Córdoba, 1993, página 591).

<sup>3</sup> "La simplificación del proceso no se puede traducir en el abandono de la función que cumple y cíclo seguirá cumpliendo: la búsqueda de la verdad", dice Binder, Alberto, *Justicia penal y Estado de derecho*, página 73.

<sup>4</sup> Opiniones de Montero, Jorge. "El procedimiento...", cit., página 248; Vivas, Gustavo. "La confesión transaccional y el juicio abreviado", en "Estudio sobre el nuevo Código Procesal Penal de Córdoba" (Lerner, 1993), página 233; Superti, Raúl, "Debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal para la provincia de Santa Fe" (Santa Fe, 1993), página 116; y Maier, "Debate...", cit., página 110, respectivamente.

<sup>5</sup> Cfr. Cesacov, Gustavo. "El juicio y la interrupción de la prescripción de la acción penal", en "Semanario Jurídico", N° 545, 25-IV-85.